Consejo Consultivo de Canarias

D I C T A M E N 3 3 9 / 2 0 2 5

(Sección 2.ª)

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de julio de 2025.

Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en relación con la *Propuesta de Resolución del procedimiento administrativo de revisión de oficio para la declaración de nulidad de diversos contratos de servicios públicos de prestación sanitaria con la entidad (...), durante el mes de abril de 2025 (EXP. 305/2025 RO)*[*].

F U N D A M E N T O S

I

1. El presente Dictamen, solicitado por la Sra. Consejera de Sanidad el 1 de julio de 2025, con registro de entrada en este Consejo Consultivo el 2 de julio de 2025, tiene por objeto el análisis jurídico de la Propuesta de Resolución del procedimiento administrativo de revisión de oficio para la declaración de nulidad de diversos contratos de servicios públicos de prestación sanitaria con la entidad (...), por importe total de 122.784, 88 euros**,** durante el mes de abril de 2025.

2. La legitimación de la Sra. Consejera de Sanidad para solicitar el dictamen, su carácter preceptivo y la competencia de este Consejo Consultivo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D).b) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2017 (LCSP).

También es de aplicación, subsidiariamente, de acuerdo con lo establecido en la Disposición final cuarta, apartado 1, de la LCSP, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

---

[*] **Ponente: Sr. Belda Quintana.**

Asimismo, resulta aplicable, en lo que no se oponga a la LCSP (Disposición derogatoria de la LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, también de carácter básico.

3. En este caso, se ha otorgado el trámite de vista y audiencia a la empresa prestadora del servicio, quien, manifiesta su conformidad con el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del contrato de servicios de rehabilitación y logopedia.

Este Consejo Consultivo en su Dictamen 72/2023, de 1 de marzo, seguido, entre otros, por los Dictámenes 170/2023, de 20 de abril, 318/2023, de 20 de julio, 386/2023, de 5 de octubre, 412/2023, de 19 de octubre, 452/2023, de 7 de noviembre y 533/2023, de 21 de diciembre, ha considerado que el dictamen debe ser preceptivo haya o no oposición del contratista, en los casos de ausencia de actos administrativos preparatorios o de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 106.1 LPACAP, por remisión del art. 41 LCSP.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 106.1 LPACAP, es preciso que el dictamen sea favorable a la declaración pretendida, no pudiéndose acordar la nulidad del acto si el dictamen no lo considera así.

4. La regulación del correspondiente procedimiento de revisión de oficio se contiene en la LPACAP, puesto que el art. 41.1 LCSP, en relación con la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas viciados de nulidad, remite a la regulación que del procedimiento de revisión de oficio se contiene en la LPACAP. Esta remisión normativa efectuada por el art. 41.1 LCSP a la legislación estatal en materia de procedimiento administrativo común, nos conduce a la aplicación de los arts. 106 a 111 LPACAP.

El art. 106.1 LPACAP contempla la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; permitiendo a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, previo dictamen favorable del órgano consultivo autonómico, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1 LPACAP.

Este artículo no contempla un procedimiento específico para la tramitación de los expedientes de declaración de nulidad, por lo que se entienden aplicables las

normas recogidas en el título IV de la LPACAP (*«De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común»),* con la especialidad exigida por el art. 106, que establece como preceptivo el previo dictamen favorable del órgano consultivo que corresponda.

5. Por lo que se refiere al órgano competente para incoar y resolver el procedimiento, en la Propuesta de Resolución (fundamento de Derecho tercero) se indica que le corresponde a la titular de la Consejería de Sanidad, atribuida por el art. 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y que ha sido delegada en los órganos de contratación en base a lo establecido en la Orden de 25 de marzo de 2025, publicada en el BOC núm. 67, de 4 de abril.

La competencia para resolver el presente procedimiento está regulada en el art. 41.3 LCSP. Dicho precepto atribuye esta competencia al órgano de contratación, sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas respectivas.

Como ha sostenido este Consejo en sus Dictámenes 272, 273, 274, 275 y 276/2024, todos de 4 de junio, con cita de la STC 68/2021, de 18 de marzo [FJ 9.b)] -conforme a la cual la determinación del órgano autonómico competente para iniciar y resolver estos procedimientos es de la competencia exclusiva autonómica-, esta competencia se atribuye por el ordenamiento jurídico autonómico a la persona titular de la Consejería competente, por aplicación de lo previsto en el art. 29.1, letra g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que atribuye al titular de cada Departamento la competencia para «*resolver los expedientes de revisión de oficio de los actos del propio Departamento*».

Por tanto, la competencia para resolver el presente procedimiento corresponde a la persona titular de la Consejería de Sanidad.

No obstante, por Orden de 25 de marzo de 2025, de la Consejera de Sanidad (BOC n.º 67 de 4 de abril de 2025) se delega en los titulares de los órganos del Servicio Canario de la Salud con facultades de contratación la competencia para incoar y resolver los expedientes de revisión de oficio en materia de contratación pública, tal y como consta correctamente en la Propuesta de Resolución.

6. En la Propuesta de Resolución, la Administración autonómica afirma la nulidad de pleno derecho por incurrir en la causa de nulidad establecida en el art. 47.1.e) LPACAP, al que se remite el art. 39.1 LCSP, señalando que las contrataciones a las que se refiere el presente expediente se han realizado prescindiendo de los trámites esenciales del procedimiento previsto en la LCSP.

7. En lo que se refiere al plazo máximo para resolver, el art. 41.1 LCSP, en relación con la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas viciados de nulidad, remite a la regulación que del correspondiente procedimiento de revisión de oficio se contiene en la LPACAP, especialmente en su art. 106.5 LPACAP, que dispone que, cuando estos procedimientos se hubieran iniciado de oficio, como es el caso, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá su caducidad.

En el presente caso el procedimiento se inicia el 5 de junio de 2025, por lo que el plazo se cumpliría el 5 de diciembre de 2025.

II

Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento de revisión de oficio, según los hechos relatados en la propuesta de resolución y la documentación contenida en el expediente remitido, son los siguientes:

Con fecha 3 de junio de 2025 la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria emite Informe-Memoria con el objeto de proponer el inicio del procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de diversos contratos administrativos de servicios de prestación sanitaria con la entidad (...).

En el mismo se indica lo siguiente:

« (...) Esta Dirección del Área de Salud de Gran Canaria, ha canalizado y cursado durante el mes de abril de 2025 la derivación solicitada por los especialistas facultados del Servicio Canario de la Salud, para la prestación de técnicas de Rehabilitación y Logopedia hacia entidades de carácter privado, para reducir la demora en la atención especializada y que aquéllos reciban la prestación de estos servicios sanitarios y asistenciales que no pueden asumir los hospitales públicos.

La razón que motiva tal derivación es la insuficiencia de recursos propios del SCS para asumir el volumen elevado de demanda, requiriéndose en consecuencia la participación de entidades privadas para la prestación de dichos servicios públicos a los que los usuarios tienen derecho, bien para reducir las listas de espera o bien porque se requiere de una técnica específica que no se presta en el ámbito de este Área de Salud.

(...)

En cuanto a los servicios sanitarios objeto del presente expediente, éstos fueron solicitados, y por tanto prestados, como consecuencia de las derivaciones de pacientes autorizadas por esta Dirección de Área, a instancias de los hospitales de referencia del Área de Salud de Gran Canaria o bien autorizadas de carácter excepcional por esta misma Dirección, a los proveedores que indicaron dichos responsables y que no pudieron asumir los hospitales públicos. Todos los servicios sanitarios fueron solicitados para atender la necesidad inmediata y urgente de asistencia requerida por los pacientes.

Las prestaciones objeto del contrato se han realizado por el tercero a entera satisfacción de la Administración y contenido u objeto de la misma.

Imposibilidad en el momento actual de proceder a la restitución recíproca de las prestaciones recibidas como consecuencia de su naturaleza y grado o nivel de ejecución, procediendo el abono de la prestación realizada, ya que de lo contrario se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración y se ocasionaría al contratista un perjuicio de imposible o difícil reparación.

Se relacionan en el "Anexo II" del presente, relación detallada del proveedor, importes de las facturas, correspondiente a dichos servicios sanitarios, incursos en este expediente 33/NUL/2025/0067, y que han sido conformadas por este Centro Gestor y expedidas por la entidad contratista por los servicios prestados con importes acordes a los precios normales de mercado. Dichas facturas ascienden a un importe bruto de ciento veintidós mil setecientos ochenta y cuatro con ochenta y ocho céntimos (122.784,88 €)».

El Anexo I del informe viene referido a la «*Entidad, importes y servicios de asistencia sanitaria prestados*»**,** donde se especifica lo siguiente:

«La entidad y los servicios prestados durante los meses de abril de 2025 son los que se citan a continuación:

(...)

REHABILITACIÓN Y LOGOPEDIA

Servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria.

Mediante Orden del Consejero de Sanidad n.º 93/2018, de 14 de febrero de 2018, se inicia el tercer concierto para la prestación efectiva de los servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria, por un período de 2 años, a contar desde el 1 de marzo de 2018 y siendo objeto de las siguientes prórrogas:

- Mediante Orden de la Consejera de Sanidad n.º 112/2020, de 28 de febrero, por un período máximo de un año, desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021.

- Mediante Orden del Consejero de Sanidad n.º 102/2021, de 22 de febrero, por un período de 2 años a contar desde el 1 de marzo de 2021.

- Mediante Orden del Consejero de Sanidad n.º 42/2023, de 26 de enero, por un período de un año, finalizando esta última prórroga el 29 de febrero de 2024, y continuando desde entonces prestándose este servicio sin cobertura jurídica formal alguna.

Siendo preciso matizar que, de conformidad con lo previsto en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que rige los acuerdos marco para la contratación mediante concierto de los servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria, el plazo de duración de los conciertos será el que se establezca en la correspondiente adjudicación, sin que la duración inicial de los mismos pueda superar los 2 años, y la duración total, incluidas las eventuales prórrogas, los 6 años desde su formalización.

Logopedia.

Mediante Orden del Consejero de Sanidad nº 408/2016, de 9 de junio, se adjudica, por un período de 2 años, concierto para la prestación efectiva de los servicios terapéuticos de rehabilitación logopédica ambulatoria, posteriormente prorrogado mediante Orden nº 306/2018, de 3 de mayo, por otros 2 años, finalizando el mismo el 18 de mayo de 2020.

Mediante Orden de la Consejera de Sanidad nº 948/2024, se adjudica nuevo contrato para la prestación del servicio de rehabilitación logopédica ambulatoria a pacientes del Servicio Canario de la Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, iniciándose el mismo el 1 de febrero de 2025 por un período de 4 años.

Habiéndose prestado por tanto el servicio de referencia durante el período comprendido entre el 19 de mayo de 2020 y el 31 de enero de 2025 sin cobertura jurídica formal alguna.

Esto conlleva a que únicamente las facturas correspondientes a las sesiones autorizadas previas a la entrada en vigor del referido contrato, continúen tramitándose por esta vía.

Importe contratado mes de abril de 2025:122.784,88 euros».

En el Anexo II consta el proveedor, facturas e importes correspondientes.

(...) - C.I.F.: (...)					
OBJETO DE LA PRESTACIÓN	PERIODO	N. SERIE FACTURA	FECHA ENTRADA	FECHA PLAZO PAGO	IMPORTE FACTURA€
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500044	06/05/2025	06/06/2025	110,37 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500045	06/05/2025	06/06/2025	501,30 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500046	06/05/2025	06/06/2025	150,15 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500047	06/05/2025	06/06/2025	290,00 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500048	06/05/2025	06/06/2025	580,00 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500049	06/05/2025	06/06/2025	2.052,50 €

REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500050	05/05/2025	05/06/2025	8.882,86 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500051	05/05/2025	05/06/2025	2.265,68 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500052	05/05/2025	05/06/2025	18.330,56 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500053	06/05/2025	06/06/2025	1.559,86 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500056	08/05/2025	08/06/2025	37.118,31 €
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500057	08/05/2025	08/06/2025	31.161,95€
REHABILITACIÓN	ABRIL/25	1222500058	08/05/2025	08/06/2025	11.980,79 €
LOGOPEDIA	ABRIL/25	1222500041	06/05/2025	06/06/2025	702,42 €
LOGOPEDIA	ABRIL/25	1222500042	06/05/2025	06/06/2025	1.303,04 €
LOGOPEDIA	ABRIL/25	1222500043	06/05/2025	06/06/2025	1.598,26 €
LOGOPEDIA	ABRIL/25	1222500054	08/05/2025	08/06/2025	603,29 €
LOGOPEDIA	ABRIL/25	1222500055	08/05/2025	08/06/2025	3.593,54 €
TOTAL IMPORTE					122.784,88 €

III

En lo que a la tramitación del procedimiento de revisión de oficio se refiere, constan los siguientes trámites:

1. Mediante Resolución n.º 6765/2025 de 5 de junio de 2025 de la Directora de Área de Salud de Gran Canaria se acuerda:

«Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 106 de la LPAC para declarar la nulidad de diversos contratos administrativos de servicios con la entidad (...) (...), y por el importe total de ciento veintidós mil setecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (122.784,88 €), por los períodos y conceptos que se señalan en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Acumular expedientes de nulidad de la entidad (...) y por los importes, períodos y conceptos que se señalan en el Anexo a esta Resolución, por las razones descritas en los antecedentes de hecho de la misma.

Tercero.- Declarar de tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Cuarto.- Conceder trámite de audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente orden, para que manifieste su conformidad o disconformidad con el presente expediente de declaración de nulidad, y todo ello según lo establecido en el art. 82 de la LPAC».

2. Se otorga trámite de audiencia a la empresa prestadora del servicio, y el 6 de junio de 2025 expresa su conformidad con el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato de servicio de rehabilitación y logopedia por importe de 122.784,88 €.

3. Consta en el expediente borrador de Propuesta de Resolución, sin fecha ni firma, por la que se propone:

«1º) Declarar la nulidad de los contratos administrativos de Servicios, con la entidad (...), con C.I.F. n.º (...) , y por el importe total de ciento veintidós mil setecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (122.784,88€), por los períodos y conceptos que se señalan en el Anexo a la presente Resolución.

2º) Proceder a la liquidación de los contratos de referencia, aprobar el gasto y abono del valor de las prestaciones, derivado del expediente de nulidad nº 33/NUL/2025/0067, relativo al servicio público de asistencia sanitaria de la entidad, objeto, facturas, importes y periodos que se relacionan en el Anexo II a la presente Resolución, en sus aplicaciones presupuestarias: G/312/2540400 y G/312C/2540900, por un importe de ciento veintidós mil setecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (122.784,88€), y abonar a el contratista el valor de sus prestaciones, conforme a la relación de facturas señaladas en el Anexo II a la presente Resolución».

4. El 26 de junio de 2025 se emite informe preceptivo de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.

IV

1. Con carácter previo al estudio de la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho invocada por la Administración para la revisión de oficio de la contratación, resulta procedente realizar una advertencia en relación con la tramitación del procedimiento, concretamente con el trámite de Propuesta de Resolución, cuestión que ya fue advertida en anteriores dictámenes solicitados por la Consejería de Sanidad en procedimientos de revisión de oficio con objeto similar al presente expediente.

El art. 106.1 LPACAP contempla la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; permitiendo a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, previo dictamen favorable del órgano consultivo autonómico, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1 LPACAP.

Este artículo no contempla un procedimiento específico para la tramitación de los expedientes de declaración de nulidad, por lo que se entienden aplicables las normas recogidas en el título IV de la LPACAP (*«De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común»),* con la especialidad exigida por el art. 106, que establece como preceptivo el previo dictamen favorable del órgano consultivo que corresponda.

Por tanto, los trámites necesarios que han de observarse en un procedimiento de revisión de oficio son:

- Resolución de incoación del procedimiento que habrá de estar debidamente fundamentada en alguna de las causas de nulidad recogidas en el art. 47 LPACAP, que deberán ser adecuadamente invocadas y contener la suficiente justificación de su concurrencia.

- Actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos; entre ellos, deberán emitirse aquellos informes que sean preceptivos y podrán emitirse aquellos que se consideren necesarios en relación con la pretensión anulatoria.

- Concesión de trámite de audiencia a todos los interesados con carácter previo a la formulación de la propuesta de resolución, en el que se les ponga de manifiesto la totalidad del expediente.

- Propuesta de Resolución dictada por el órgano instructor, que debe recoger los antecedentes de hecho y también los fundamentos jurídicos y los motivos de nulidad radical en los que se basa la decisión que se pretende adoptar.

Analizado el contenido del expediente remitido, se advierte que falta la Propuesta de Resolución debidamente dictada por el órgano instructor. Sólo consta un borrador de propuesta de resolución, sin fecha ni firma.

Debe recordarse que las propuestas de resolución, en cuanto resoluciones administrativas que despliegan efectos en la tramitación del procedimiento, deben ir debidamente firmadas por el órgano competente, pues sólo así se entienden dictadas conforme a los dispuesto en el art. 39.1 LPACAP. No obstante, dicho defecto formal, no tiene virtualidad invalidante, por cuanto no tiene transcendencia bastante para posibilitar la alteración del resulto final del procedimiento, y generar efectiva indefensión en los interesados, por lo que no conlleva la necesaria retroacción del

procedimiento, en aras de los principios de agilidad, eficacia y economía procesal que han de regir la actuación de la Administración pública.

2. En cuanto al análisis de la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho invocada por la Administración para la revisión de oficio de la contratación**,** este Consejo Consultivo, siguiendo constante y abundante Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha reiterado que la revisión de oficio supone el examen por la Administración de la legalidad de sus propios actos y en razón de los vicios e infracciones legales que le son imputables a los mismos, es decir, que por formar parte de su contenido, formal o sustantivo, le son atribuibles y susceptibles de valoración y corrección por la propia Administración autora del acto en el ejercicio de su potestad de revisión, sin que pueda extenderse al examen de la legalidad de otros actos dictados por otras administraciones no sujetos a revisión (STS 405/2020, de 14 de mayo).

La revisión de oficio implica el ejercicio de una facultad exorbitante por parte de la Administración para expulsar del ordenamiento jurídico actos firmes en vía administrativa que adolecen de vicios especialmente graves, en cuya aplicación se ha de ser riguroso por implicar un conflicto entre dos principios generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ésta solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este Consejo 302/2018, de 29 de junio y 430/2017, de 14 de noviembre, que reiteran varios pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido).

Por su parte, en nuestro Dictamen 46/2016, de 18 de febrero, afirmábamos que *«no toda infracción del Ordenamiento jurídico conlleva la revisión de oficio, que no está prevista para corregir errores o deficiencias de la Administración, sino para suprimir actos administrativos contaminados con vicios graves determinantes del nacimiento del derecho o facultad (…) ».*

En definitiva, *«la revisión de oficio en principio no es una técnica al servicio de la instrucción de una "causa general" respecto de determinado procedimiento, sino el instrumento que permite anular actos con vicios de orden público, que son los que la ley califica como causas de revisión, debidamente interpretadas en función de las circunstancias del caso, la conducta de los interesados y la actuación de la Administración»* (Dictamen 449/2017, de 5 de diciembre).

3. En el presente caso, el objeto del presente procedimiento administrativo de revisión de oficio, es la declaración de nulidad de diversos contratos administrativos de servicios con la entidad (...).

En primer lugar, en cuanto a la existencia de varios contratos administrativos de servicios, con la citada entidad o, en puridad, a la falta de lo que debieron ser varios contratos administrativos de servicios debidamente adjudicados y formalizados, en el anexo II de la propuesta de resolución se especifica el objeto de la prestación correspondiente a cada factura con la misma entidad. Todas corresponden a la prestación de servicios sanitarios, pero trece de ellas son de rehabilitación y cinco de logopedia.

Si bien es cierto que tales prestaciones sanitarias pudieron ser objeto de un mismo contrato administrativo de servicios que englobara la totalidad de los servicios sanitarios indicados, lo cierto es que, nada impide que puedan ser objeto de distintos contratos administrativos de servicios según el tipo de prestación sanitaria.

Por otra parte, en la Orden de inicio se acuerda acumular expedientes de nulidad de la citada entidad**,** y por los importes, períodos y conceptos que se señalan en el Anexo de la Resolución, identificando cada factura como un contrato distinto.

Conviene advertir que la posible existencia de varias facturas (en este caso tenemos 13 facturas por rehabilitación y 5 de logopedia, todas del mes de abril de 2025) con la misma empresa, no implica la existencia de varios contratos administrativos de servicios.

No se estima correcto identificar factura con contrato. Para determinar si estamos ante lo que debieron ser varios contratos administrativos, no podemos simplemente considerar como elemento definidor la existencia de varias facturas. Los elementos esenciales del contrato como institución jurídica, son: sujeto, objeto y causa. Partiendo, así, de esta construcción doctrinal podemos concluir que existirá un único contrato cuando haya coincidencia en los tres citados elementos, es decir cuando la prestación a realizar para atender una necesidad haya de contratarse con un mismo sujeto, para realizar un mismo objeto, y motivado por una misma causa. Por el contrario, deberán formalizarse contratos distintos desde el momento en que la adecuada ejecución de la prestación a realizar motive que uno de esos tres elementos varíe, aunque haya coincidencia en los otros dos.

Según el art. 17 LCSP, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

Por tanto, si las prestaciones se realizan de forma continuada a lo largo del tiempo, es decir, las obligaciones de las partes se extienden en el tiempo y se van cumpliendo de forma periódica o sucesiva, estamos ante un único contrato de tracto sucesivo, y no ante muchos contratos de servicios por cada mes de prestación, independientemente del sistema de determinación del precio conforme a lo establecido en el art. 309 LCSP.

En relación con la acumulación de lo que se denomina «*expedientes de nulidad*» (correctamente, son procedimientos de revisión de oficio), el art. 57 LPACAP permite al órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, acordar la acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

De dicho precepto legal se deriva que la acumulación se puede acordar al tiempo de iniciarse el procedimiento o bien acordarse sobre procedimientos ya incoados, y puede hacerse de oficio o a instancia de parte. Además, el art. 57 LPACAP establece el requisito de que el órgano que decida la acumulación sea el mismo que deba tramitar y resolver el procedimiento y en cuanto al contenido de la decisión en sí, se exige que entre los procedimientos que se acumulan exista «*íntima conexión*» o «*identidad sustancial*».

En la Orden de inicio se indica que *«Así, se estima oportuno la acumulación en un sólo expediente de nulidad de las diversas facturas correspondientes al mismo acreedor, dado que se trata de un mismo objeto, el abono de prestaciones sanitarias, y todos guardan identidad sustancial o íntima conexión, así como por razones de economía procedimental al ser el mismo órgano quien debe tramitar y resolver el procedimiento».*

Al respecto, debemos indicar que si lo que se pretende es acumular procedimientos, resulta improcedente señalar que se acumulan diversas facturas, se trata de acumular procedimientos administrativos, en este caso, procedimientos de revisión de oficio. Y la identidad sustancial o íntima conexión va referida a los procedimientos que se acumulan, es decir, en este caso, existe dicha identidad sustancial porque en las distintas prestaciones llevadas a cabo por la misma empresa,

existe la misma causa de nulidad de pleno derecho, cual es la de haberse prestado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, previsto en la LCSP, incurriendo en el supuesto de hecho previsto en el art. 39.1.a) de la citada ley en relación al art. 47.1.e) LPACAP.

No procede señalar que la acumulación se acuerda porque las facturas tienen el mismo objeto y mismo acreedor, porque si así fuera, hablaríamos de un mismo contrato de servicios, y por tanto estaríamos ante un sólo procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad de ese contrato administrativo.

4. En cuanto a la causa de nulidad de pleno derecho concurrente, en la Propuesta de Resolución, se señala, de un manera genérica, en su fundamento de Derecho segundo que *«Las contrataciones a las que se refiere el presente expediente se han realizado prescindiendo de los trámites esenciales del procedimiento previsto en la LCSP, al tratarse el objeto de las facturas presentadas de una prestación de servicio público de asistencia sanitaria, incurriendo en el supuesto de hecho previsto en el artículo 39.1. a) de la citada ley con relación al artículo 47.1 e) de la LPAC».*

Del Informe-Memoria emitido por el Director de Área de Salud de Gran Canaria, se deduce lo siguiente:

En el Informe-Memoria se hace referencia a un contrato adjudicado mediante Orden del Consejero de Sanidad n.º 93/2018, de 14 de febrero de 2018, por la que se inicia el tercer concierto para la prestación efectiva de los servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria, por un período de 2 años, a contar desde el 1 de marzo de 2018. Dicho concierto es objeto de tres prórrogas, la última de ellas finalizó el 29 de febrero de 2024. Se indica que desde entonces se ha continuado prestando este servicio sin cobertura jurídica contractual alguna.

En cuanto al servicio de logopedia se hace constar que mediante Orden del Consejero de Sanidad n.º 408/2016, de 9 de junio, se adjudica, por un período de 2 años, concierto para la prestación efectiva de los servicios terapéuticos de rehabilitación logopédica ambulatoria, posteriormente prorrogado mediante Orden n.º 306/2018, de 3 de mayo, por otros 2 años, finalizando el mismo el 18 de mayo de 2020.

Posteriormente, por Orden de la Consejera de Sanidad n.º 948/2024, se adjudica nuevo contrato para la prestación del servicio de rehabilitación logopédica ambulatoria a pacientes del Servicio Canario de la Salud en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Canarias, iniciándose el mismo el 1 de febrero de 2025 por un período de 4 años.

En primer lugar, no se especifica la empresa adjudicataria del servicio, y en segundo lugar, si bien se indica que se ha prestado el servicio de logopedia durante el período comprendido entre el 19 de mayo de 2020 y el 31 de enero de 2025 sin cobertura jurídica contractual alguna, lo cierto es que la prestación del servicio de logopedia cuya nulidad se pretende, se produce en el mes de abril de 2025, durante el cual existía un contrato en vigor.

Respecto a ello, en el informe memoria se aclara que se trata de facturas correspondientes a las sesiones autorizadas previas a la entrada en vigor del referido contrato, por lo que se entiende que aunque las facturas se emitan en abril de 2025, ese servicio no está incluido en el objeto del contrato cuya vigencia se inicia el 1 de febrero de 2025, adjudicado por Orden de la Consejera de Sanidad n.º 948/2024, pues si así fuera (para lo cual sería necesario analizar el contenido del contrato y de los Pliegos respectivos), no estaría afecto a la causa de nulidad radical del art. 47.1 letra e) LPACAP, siempre y cuando el nuevo adjudicatario fuera la empresa (...), cuestión también que se desconoce.

De este informe se deriva que las prestaciones objeto del procedimiento de revisión de oficio en el mes de abril de 2025, se llevaron a cabo «*de facto*» sin cobertura contractual.

En el Informe-Memoria se reconoce expresamente que los servicios sanitarios objeto del presente expediente, fueron solicitados, y por tanto prestados, como consecuencia de las derivaciones de pacientes autorizadas por la Dirección de Área, a instancias de los hospitales de referencia del Área de Salud de Gran Canaria o bien autorizadas de carácter excepcional por esa misma Dirección, a los proveedores que indicaron dichos responsables y que no pudieron asumir los hospitales públicos.

Por tanto, del expediente remitido, especialmente del Informe-Memoria, se deduce que la entidad Ceca Rehabilitación S.L**,** llevó a cabo la prestación sanitaria, sin seguirse los preceptivos trámites de la contratación administrativa establecidos en la normativa aplicable a la materia (LCSP). En consecuencia, se desprende que se ha incurrido en la causa de nulidad de pleno derecho contenida en el art. 39.1 LCSP en relación con el art. 47.1.e) al haberse prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

5. En relación con la causa establecida en el art. 47.1.e) LPACAP, este Consejo Consultivo ha manifestado, por ejemplo, en el Dictamen 145/2024, de 21 de marzo, (con cita de los Dictámenes 8/2021, de 15 de enero, 489/2021, de 14 de octubre y 161/2020, de 1 de junio), lo siguiente:

«El art. 62.1, e) LRJAP-PAC configura como una causa de nulidad el que los actos sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Como las causas de nulidad radical o absoluta de los actos administrativos son tasadas, tienen carácter excepcional y han de interpretarse de forma estricta, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es especialmente restrictiva en cuanto a la aplicación de esa causa de nulidad, ya que el empleo por la Ley de los dos adverbios "total y absolutamente" impone que los defectos formales necesarios para aplicar esta nulidad radical deben ser de tal dimensión que es preciso que se haya prescindido de modo completo y absoluto del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de sus trámites. La omisión de algún trámite se equipara a la omisión total del procedimiento cuando tiene la naturaleza de esencial en los supuestos en que haya causado indefensión material al interesado (para lo cual habrán de tenerse en cuenta, entre otras circunstancias, las consecuencias que sufrió por la omisión del trámite). También se equipara a la omisión total si los trámites incumplidos, de haberse observado, habrían determinado un acto de contenido distinto. Consúltense al respecto las SSTS de 23 febrero de 2016; de 26 enero de 2016; de 24 enero de 2014; de 27 junio de 2012 y de 25 abril de 2002 (...) ».

También hemos señalado en los DCCC 84/2014, de 17 de marzo, y 258/2020, de 25 de junio, que *«(L)a interpretación jurisprudencial de este precepto considera que se está ante esta causa de nulidad no sólo cuando el acto se dicta prescindiendo de todo procedimiento, sino también cuando se dicta a través de un procedimiento que no es el previsto legalmente; o cuando, aun siguiendo el procedimiento debido, se omiten trámites esenciales de éste que causan indefensión absoluta a los interesados».* Véanse por todas las SSTS de 25 de abril de 2002 y de 27 de junio de 2012.

6. Como razonábamos en nuestro Dictamen 555/2021, de 18 de noviembre, citando a su vez otro similar -el Dictamen 483/2021, de 14 de octubre- procede señalar, de idéntica manera, en este caso que, aplicando los razonamientos jurídicos que se han expuesto en las líneas precedentes al supuesto de hecho analizado, se ha de concluir que la actuación administrativa incurre de forma clara, manifiesta y ostensible en la causa de nulidad establecida en el art. 47.1, apartado e) LPACAP, toda vez que se ha procedido a recibir la prestación del servicio sin la previa tramitación del oportuno procedimiento de contratación a tal efecto.

Además, tal infracción del Ordenamiento Jurídico no puede ser imputable al tercero que ha realizado la prestación de buena fe, sino únicamente a la propia Administración, que justifica su actuación en el referido Informe-Memoria, señalando que *«En cuanto a los servicios sanitarios objeto del presente expediente, éstos fueron solicitados, y por tanto prestados, como consecuencia de las derivaciones de pacientes autorizadas por esta Dirección de Área, a instancias de los hospitales de referencia del Área de Salud de Gran Canaria o bien autorizadas de carácter excepcional por esta misma Dirección, a los proveedores que indicaron dichos responsables y que no pudieron asumir los hospitales públicos. Todos los servicios sanitarios fueron solicitados para atender la necesidad inmediata y urgente de asistencia requerida por los pacientes. Las prestaciones objeto del contrato se han realizado por el tercero a entera satisfacción de la Administración y contenido u objeto de la misma».*

Así pues, se reconoce en el informe que los proveedores de los servicios, en este caso, un solo proveedor, fueron indicados habiéndose obviado toda clase de procedimiento de licitación al efecto -y, por tanto, prestándose el servicio de referencia sin cobertura jurídica formal alguna-, y habiéndose también desarrollado el servicio a entera satisfacción de la Administración.

En consecuencia, la prestación de los servicios sanitarios se produce de forma irregular, contraviniendo la normativa de contratación y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, incurriendo en la causa de nulidad prevista en el art. 47.1.e) LPACAP.

La contratación verbal, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia, está expresamente prohibida en la LCSP que dispone: «Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia» (art. 37.1 LCSP).

Por todo ello, en suma, la Propuesta de Resolución, que pretende la declaración de nulidad de la citada contratación, se considera ajustada a Derecho en lo que respecta a la causa de nulidad invocada.

7. En cuanto a los efectos económicos de la declaración de nulidad de la contratación, de la documentación obrante en el expediente se pone de manifiesto que el inicio del presente expediente de revisión de oficio está motivado por la prestación del servicio en el mes de abril de 2025, sin cobertura legal alguna.

Con relación a las facturas a la que se refiere este procedimiento concreto, ha de estarse a lo señalado en el Dictamen 265/2019, esto es, a lo dispuesto en el art. 42.1 LCSP, que prescribe que la *«declaración de nulidad de los actos preparatorios del*

contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido».

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse para el personal al servicio de las Administraciones públicas (disposición adicional vigésima octava LCSP).

Como se ha señalado en múltiples ocasiones por este Consejo Consultivo, en lo que se refiere al momento procedimental en el que procede efectuar el cálculo de la liquidación del contrato, cabe recordar que el art. 42.1 LCSP establece que aquella fase se producirá una vez firme la resolución por la que se acuerde la revisión de oficio (a través del oportuno expediente contradictorio).

Sin embargo, como ya ha indicado el propio Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, de 21 de diciembre (y este Consejo Consultivo de Canarias -Dictamen 220/2013, de 19 de junio-), *« (...) nada impide, por economía procesal, acumular la declaración de nulidad a la compensación o indemnización que obviamente debe estimarse y aplicarse según los propios criterios ahora descritos en el artículo 35.1 de la Ley de Contratos (...), para tramitar simultáneamente el procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación del contrato por ser nula de pleno derecho con la compensación por los trabajos realizados prevista en ese mismo artículo para el supuesto de nulidad de pleno derecho de la misma».*

De esta manera, resulta posible resolver de forma conjunta sobre la nulidad del acto de contratación afectado y sobre la liquidación y, en su caso, indemnización que proceda (art. 42.1 LCSP).

En el presente caso la restitución del valor de la prestación al contratista coincide con la totalidad del importe de las facturas en su momento presentadas, lo que incluye la totalidad del precio del contrato efectivamente ejecutado.

De todo lo expuesto cabe concluir que en los supuestos, como en el presente caso, en que la contratista ha manifestado buena fe, prestando el servicio a satisfacción de la Administración, aun concurriendo causa de nulidad al haberse dictado los actos preparatorios del contrato de servicios sanitarios, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, tal como prevé el art. 47.1.e) LPACAP, en relación con el art. 39.1 LCSP, se debe pagar a la contratista

en idéntica cuantía al coste del servicio realizado, por lo que hay que concluir que la Propuesta de Resolución debe liquidar el contrato por la cantidad igual al coste del servicio efectivamente realizado.

El incremento patrimonial, con el consiguiente empobrecimiento, resultaría de la ejecución de unos servicios prestados por el contratista en beneficio de la Administración no abonados.

8. Resta por abordar la cuestión relativa a las consecuencias derivadas de la posible prestación del servicio durante periodos diferentes a los que son objeto del presente procedimiento de revisión de oficio y que se traduzcan en facturas que puedan emitirse al amparo del presente contrato cuya nulidad se dictamina.

En relación con ello, ya en nuestros Dictámenes 452/2023, de 7 de noviembre de 2023, 49/2024, de 25 de enero o 548/2024, de 2 de octubre, nos hemos pronunciado extensamente sobre esta circunstancia, a cuyo contenido nos remitimos.

Por tanto, una vez dictaminada la nulidad de esta contratación, no procederá la emisión de nuevo Dictamen de este Consejo en relación con otras facturas referidas al mismo contrato, que no hayan sido objeto del presente pronunciamiento, al quedar afectadas por la nulidad ya dictaminada. Del mismo modo, declarada la nulidad de pleno Derecho, no debería continuar la prestación de ese servicio que ya ha sido declarada nula de pleno Derecho, por cuanto, la Administración pública debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), y por tanto la prosecución del interés público sólo podrá materializarse dentro de la legalidad.

9. Por último, en cuanto a la habitualidad con que se realizan fragmentaciones de procedimientos de revisión de oficio, ha de recordarse lo razonado por este Consejo Consultivo en el reiterado Dictamen 452/2023, de 7 de noviembre:

«De otro lado, cabe insistir una vez más en que la reiteración de la fragmentación de procedimientos de revisión de oficio por periodos de facturación, de una misma prórroga contractual que se mantiene en el tiempo, contraviniendo los principios de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, eficacia, economía y eficiencia contenidos en el art. 3.1 d), h), i) y j) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), por cuanto ello obliga a sucesivos procedimientos de revisión de oficio, puede suponer, en su caso, un abuso de derecho o fraude de ley, que puede operar como un límite a la revisión de oficio del art. 110 LPACAP, tal y como hemos apreciado en algunas ocasiones, como manifestamos en el Dictamen 318/2023, de 20 de abril, con cita de los dictámenes 158/2023, de 18 de abril, 80, 81 y 82/2020, de 3 de marzo, así como en los

Dictámenes 386/2023, de 5 de octubre y 412/2023, de 19 de octubre, a los cuales nos remitimos para evitar reiteraciones.

Este Consejo Consultivo dictamina, entre otras cuestiones y conforme a su Ley reguladora, revisiones de oficio de actos preparatorios y de adjudicación de contratos, por lo que la fragmentación y multiplicación de procedimientos de revisión de oficio por periodos de facturación de un mismo contrato, con el fin de pagar «facturas» (nótese que cada procedimiento en sus antecedentes surge por la existencia de una determinada «factura»), además de contravenir los principios ya citados de la LRJSP, vulnera la finalidad de la revisión de oficio en los estrictos términos en que esta ha de interpretarse, así como la naturaleza de este Órgano Consultivo, tratando de implicarlo ilegítimamente en la gestión económica financiera diaria de la Administración solicitante.

Además, este Consejo Consultivo no puede sino reiterar la necesidad de que las Administraciones públicas respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos, erradicando las prácticas que los vulneran. Este tipo de irregularidades, frecuentemente provocadas por graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación, originan situaciones de hecho en la prestación de los servicios cuya compensación luego, a su vez, genera distorsiones y tensiones sobre otras vías a fin de permitir los correspondientes pagos cuando, en puridad, deberían haberse canalizado en el marco de la relación contractual. Todo ello, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de orden administrativo o incluso penal en que pudieran incurrir las correspondientes autoridades o personal al servicio de las Administraciones públicas».

Por otra parte, cabe señalar que la prestación de los servicios y el abono de las correspondientes facturas a través de la declaración de nulidad de contratos por no cumplir las formalidades legalmente establecidas, en ningún caso, puede erigirse como forma habitual de contratación por parte de las Administraciones públicas, eludiendo la tramitación del oportuno procedimiento de contratación donde se respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos.

Esta situación, a todas luces irregular, debe cesar mediante el oportuno procedimiento de contratación conforme a las previsiones de la LCSP, y su finalización mediante adjudicación y formalización del contrato correspondiente, para dar cobertura jurídica adecuada a esta actuación material contraria a los principios por los que se debe regir la contratación pública. Los motivos alegados ponen de manifiesto una falta de planificación del órgano competente, y esta grave irregularidad, como tal, no puede prolongarse en el tiempo. Debe frenarse esta

práctica recurrente que infringe de manera palmaria, evidente y reiterada los más elementales principios de la contratación pública, eludiendo la aplicación de la LCSP, y convirtiendo al procedimiento de revisión de oficio de actos nulos en una suerte de procedimiento de contratación alternativo.

Además, se constata que este hecho no se produce de manera puntual y respecto de unas necesidades extraordinarias, sino que se trata de una práctica habitual y reiterada por parte de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, respecto de prestaciones sanitarias competencia del Servicio Canario de Salud, incluidas dentro de la cartera de servicios, como es la rehabilitación y logopedia, prestaciones ordinarias y esenciales dentro del servicio público sanitario.

No se puede normalizar el uso de este procedimiento excepcional convirtiéndolo en una práctica habitual de la Administración pública, y un procedimiento alternativo al previsto en la LCSP, con abuso general de esta institución del enriquecimiento injusto y de la declaración de nulidad.

10. Para finalizar, este Consejo Consultivo no puede dejar de señalar que, al igual que lo hemos indicado así en otros pronunciamientos anteriores (por todos, Dictámenes 119 y 120/2024, de 7 de marzo, y 202/2024, de 24 de abril), del examen del expediente se desprende que la finalidad del procedimiento de revisión de oficio, en este caso, es el pago de unas facturas.

En casos como el que analizamos, el procedimiento de revisión de oficio no sirve a los fines que le son propios, haciéndose un uso fraudulento del mismo e incurriéndose en una clara desviación de poder (art. 70.2, párrafo segundo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). En efecto, cuando lo que se persigue a través de la revisión de oficio no es, principalmente, la depuración del ordenamiento jurídico -tratando de expulsar de éste aquellos actos firmes en vía administrativa que adolezcan de vicios especialmente graves y determinantes de su nulidad de pleno derecho-, sino su instrumentalización, es decir, su utilización como mecanismo que permita soslayar todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de facturas debidas a los contratistas (*v.gr.*, levantamiento de los posibles reparos de la Intervención), nos encontramos ante un uso fraudulento o, cuanto menos, abusivo de dicha potestad revisora.

Como hemos repetido en otras ocasiones, este Consejo Consultivo dictamina, entre otras cuestiones y conforme a su Ley reguladora, revisiones de oficio de actos preparatorios y de adjudicación de contratos, por lo que la utilización -y, en muchos

casos, reiteración- de procedimientos de revisión de oficio con el fin de pagar «*facturas*», vulnera la finalidad de la revisión de oficio en los estrictos términos en que ésta ha de interpretarse (entre otros, Dictámenes 412/2023, de 19 de octubre, 452/2023, de 7 de noviembre, 499/2023, de 7 de diciembre o 11/2024, de 11 de enero). En atención a tales circunstancias, y como se ha advertido en otros pronunciamientos de este Organismo consultivo (*v.gr.*, Dictámenes 119 y 120/2024, de 7 de marzo), *« (...) antes de incoar un procedimiento de revisión de oficio la Administración actuante debe valorar concienzudamente la necesidad de acudir al citado procedimiento excepcional, debiendo valorar otras alternativas de convalidación o resolución del reparo y sólo acudir a este instrumento excepcional cuando existan auténticas causas de nulidad de pleno derecho y la infracción sea grave, evidente y palmaria, en los términos ya indicados en este mismo Fundamento».*

En el ámbito de la contratación administrativa, la legislación es especialmente rigurosa al exigir el cumplimiento de los trámites relativos a la preparación y adjudicación de los contratos, en garantía no solo del interés público, sino también del respeto a principios tan esenciales en este ámbito de actuación administrativa como son los de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores (art. 1 LCSP).

Así pues, al no haberse tramitado el procedimiento legalmente establecido para la contratación de los servicios sanitarios referidos, debe concluirse que concurre la causa de nulidad prevista en el art. 47.1.e) LPACAP. Y en este sentido se considera conforme a Derecho la propuesta de resolución, no así el uso abusivo de este procedimiento excepcional como forma alternativa al procedimiento de contratación administrativa articulado en la LCSP.

C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución del procedimiento administrativo de revisión de oficio para la declaración de nulidad de diversos contratos de servicios públicos de prestación sanitaria, realizado por la entidad (...), por importe total de 122.784,88 euros, durante el mes de abril 2025, se considera conforme a Derecho, dictaminándose favorablemente, en virtud de los razonamientos expuestos, al concurrir causa de nulidad de pleno derecho en los términos indicados en el Fundamento IV, sin perjuicio de las advertencias señaladas en cuanto a la

consideración de varios contratos de servicios, así como a la práctica habitual y reiterada de prestación de servicios sin cobertura contractual y a la imposibilidad de utilizar este procedimiento de revisión de oficio como forma alternativa de contratación.